



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	05001-31-05-001-2021-0252-01
Demandante	Martha Alicia Fernández Murillo
Demandados	Pensiones Antioquia
Llamada en Garantía	Suramericana S.A.
Asunto	Apelación auto que resuelve excepción previa
Procedencia	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema	Excepción previa Falta de jurisdicción

Medellín, mayo cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, con ausencia justificada y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del extremo activo de la relación procesal, contra el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 27 de marzo de 2023, por medio del cual se declaró probada la excepción de falta de jurisdicción, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MARTHA ALICIA FERNANDEZ

MURILLO en contra de PENSIONES DE ANTIOQUIA. Radicado 05001-31-05-001-2021-00252-01.

1.- ANTECEDENTES

La señora MARTHA ALICIA FERNANDEZ MURILLO, convocó a juicio a PENSIONES DE ANTIOQUIA, pretendiendo se declare que le asiste derecho a percibir la pensión de sobrevivencia causada por el fallecimiento de su madre NELIDA DEL SOCORRO MURILLO MUÑOZ; en consecuencia se condene a PENSIONES DE ANTIOQUIA, a pagar la prestación en forma retroactiva a partir del 30 de junio de 2020, incluyendo la mesada 14 del mes de junio de dicha anualidad, más los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio de estos la indexación.

Como fundamento fáctico se expuso en síntesis que la señora Nelida del Socorro Murillo Muñoz, recibió pensión de jubilación por parte de Pensiones de Antioquia, el 02 de abril de 2003, en calidad de trabajadora oficial, que falleció el 30 de junio de 2020, que la demandante es hija de la pensionada fallecida y presenta una pérdida de capacidad laboral del 51.97% estructurada el 25 de agosto de 2010, que aunque fue pensionada por invalidez por parte de Protección S.A. a partir del 22 de noviembre de 2010, toda la vida dependió de su madre, siendo insuficiente su pensión, en tanto corresponde a un salario mínimo legal.

Notificada Pensiones de Antioquia, replicó el libelo inaugural, sosteniendo que no le asiste derecho a la demandante a la sustitución pensional por no acreditar el requisito de dependencia económica y propone como excepción previa la falta de jurisdicción y competencia, aduciendo que el proceso debe ser conocido por la jurisdicción contenciosa administrativa, en tanto la causante ostentó la condición de empleada pública y la pensión es administrada por una entidad pública, establecimiento público de orden departamental.

2.- AUTO RECURRIDO

En audiencia llevada a cabo el 27 de marzo de 2023, el Juzgado de Conocimiento, declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia formulada por la accionada, ordenando remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín, reparto.

3.- APELACIÓN

La poderhabiente judicial de la actora interpone el recurso de apelación, argumentando que en la resolución del 02 de abril de 2003, emitida por Pensiones de Antioquia, artículo primero, se indica que el reconocimiento de la pensión se da a partir “del retiro del servicio oficial” con lo cual se acepta que la misma era trabajadora oficial.

4.- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente el extremo activo de la relación procesal se pronunció indicando que si bien no se aporta copia del contrato que dé cuenta de la clasificación de la relación contractual de la causante, de la Resolución 2021030081 del 15 de febrero de 2021, literal segundo inciso final, se deduce que la misma ostentaba el cargo de trabajadora oficial, dado que dicho acto administrativo dispone “*día siguiente a la fecha en que acreditó el retiro definitivo del servicio oficial*” y que en la certificación laboral aportada por la parte ejecutada se advierte que la señora NELIDA DEL SOCORRO era auxiliar de servicios generales y que por regla general los trabajadores están vinculados mediante contrato laboral pues solo son trabajadores públicos los ocupantes de cargos administrativos.

5.- CONSIDERACIONES

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

5.1.- Problema Jurídico

Lo es determinar:

¿Si debe revocarse el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 27 de marzo de 2023, por medio del cual se declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción, estableciendo para tal fin, si la pensionada fallecida ostentó la calidad de trabajadora oficial o empleada pública y de contera cuál es la jurisdicción competente para conocer de este asunto?

5.2.- Tesis

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis, según la cual esta jurisdicción no es competente para conocer del proceso, toda vez que la señora NELIDA DEL SOCORRO MURILLO MUÑOZ, pensionada fallecida, ostentó la calidad de empleada pública adscrita a la Secretaria de Educación para la Cultura en el Departamento de Antioquia. En consecuencia, el auto recurrido debe ser CONFIRMADO.

5.3.- Premisas Normativas

Se precisa, inicialmente, que el auto controvertido en la alzada, es apelable en virtud de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 65 del Código General del Proceso.

Para dirimir el asunto, incumbe señalar que el numeral 1° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo

2° de la Ley 712 de 2001, al referirse a la competencia de la Jurisdicción Laboral, señala lo siguiente:

“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.

Asimismo, artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, dispone:

“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

(...)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.”

Sobre el particular, la Corte Constitucional, entre otros. en Auto 1155 de 2021, adoctrinó:

“La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de aquellos asuntos en los que se discute el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, causada por un empleado público que estaba afiliado a una entidad de derecho público. El artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de todas las controversias originadas en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en las que estén involucradas entidades públicas o particulares cuando ejerzan la

función administrativa. Concretamente, en los temas relacionados con la seguridad social, el numeral 4 indica que aquella jurisdicción estudiará los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”.^[14]

10. *Siguiendo tal artículo, la Corte Constitucional^[15] ha establecido que, en lo que se refiere a las controversias en materia de seguridad social, la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se establece a través de dos factores concurrentes: (i) la calidad de empleado público del sujeto que demanda (determinada por la naturaleza del vínculo laboral y las funciones que desempeña) y (ii) la naturaleza jurídica de la entidad demandada (fijada por su condición de persona de derecho público).”*

No sobra recordar que el concepto servidor público comprende, entre otros, a los empleados públicos y trabajadores oficiales, siendo los primeros objetos de una relación legal o reglamentaria, vinculados a través de un acto administrativo de nombramiento y sucedido de un acta de posesión, mientras el trabajador oficial se vincula con el Estado a través de un contrato individual de trabajo, cuyo régimen laboral, en principio, está contenido en el contrato.

5.4. Caso concreto

En el sublite, no está en discusión que Pensiones de Antioquia es un establecimiento público del orden departamental que funge como administradora del régimen de prima media con prestación definida, cuyo capital es 100% público, véase certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, anexo 6 documento 2, folio 9 y Decreto 3780 del 15 de diciembre de 1991, folio 21 ibídem.

En consecuencia, para efectos de fijar la jurisdicción competente, resulta necesario determinar la naturaleza del vínculo de la señora Nelida Murillo Muñoz con el Departamento de Antioquia, para el momento en que adquirió el derecho pensional cuya sustitución hoy se pretende.

Para este efecto, se precisa que no obra en la plenaria una certificación de la categoría del cargo desempeñado por señora Nelida del Socorro Murillo Muñoz, al momento de su jubilación, no obstante, para la Sala es acertado concluir, como lo hizo la a quo, que la pensionada fallecida detentaba una relación legal y reglamentaria con el Departamento de Antioquia, por las siguientes razones:

En primer lugar, el artículo 233 del Decreto 1222 de 1986 establece, como regla general, que los servidores departamentales tienen la calidad de empleados públicos y por excepción son trabajadores oficiales *“los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas”*, sobre el alcance de este concepto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL391 de 2020 explicó: *“De ahí que, en la actualidad, la línea jurisprudencial al respecto, como se adujo en la sentencia CSJ SL4440-2017, reiterada en las sentencias CSJ SL7783-2017 y CSJ SL3934-2018, sostiene que la actividad de los trabajadores oficiales, en torno al concepto de construcción y mantenimiento de “obra pública”, se refiere tanto a las actividades de fabricación, instalación, montaje o demolición de estructura, infraestructuras y edificaciones, como al “[...] conjunto de actividades orientadas a la conservación, renovación y mejora del bien construido, lo cual implica intervenciones para su reparación de base, transformación estructural, garantía de prolongación de su vida útil y engrandecimiento”, sin diferenciar entre bienes de uso público y bienes fiscales.”*

Y la certificación laboral de empleadores para bono pensional emitido por la Secretaria de Recurso Humanos del Departamento de Antioquia, folios 43 doc. 2 anexo 06, indica que la trabajadora desempeñaba el cargo de auxiliar de servicios generales código 605 1-1 en el Colegio Rafael J. Mejía del municipio de Támesis, adscrito a la Secretaria de Educación para la Cultura, cargo que desempeñó entre el 22 de julio de 1976 y el 01 de abril de 2003 y en este mismo sentido se registra en el certificado de desempleo y paz y salvo, folios 63, siendo evidente que el mencionado cargo no hace relación a actividades de construcción y mantenimiento y en el misma línea la Secretaria de Educación para la Cultura no presta esta clase de servicio.

En esta perspectiva la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto al cargo de auxiliar de servicios generales, en sentencia SL2717 de 2020, resaltó:

“Así las cosas, se evidencian los yerros jurídicos del Tribunal al resolver la controversia bajo la égida del art. 53 de la CN, por ser incuestionable que las labores desarrolladas por el demandante de oficios varios en el cargo de auxiliar de servicios generales, nada tenían que ver ni guardaban relación con la construcción y sostenimiento de obra pública, y el hecho de que no se hubiera posesionado, para nada le concede tal prerrogativa. Como se dijo en párrafo precedente, las irregularidades que se puedan presentar en el trámite de un nombramiento y posesión de un empleado público, no conlleva la asunción de la calidad de trabajador oficial. (...)

La Corte ha sostenido que dichas labores no solo se limitan a los trabajos de «pico y pala», pues existen otras actividades, materiales e intelectuales, que tienen que ver directa e inmediatamente con su ejecución o adecuado desarrollo. Por ejemplo, en algunos casos, ha esgrimido que servidores que realizaron actividades de ingeniero de obras de infraestructura (CSJ SL 3676, 17 dic. 2010), técnico de pavimentos (CSJ SL 36706, 7 sep. 2010), ingeniero analista de pavimentos (CSJ SL 37106, 10 ago. 2010), cocinera de campamento de obras (CSJ SL15079-2014), conductor de transporte liviano de pavimentos (CSJ SL9767-2016), topógrafo (CSJ SL13996-2016), mantenimiento estructural de rellenos sanitarios (CSJ SL2603-2017), son trabajadores oficiales.

Pero también ha puntualizado que labores de servicios generales y vigilancia, comunes a todas las entidades, desarrolladas por personal del nivel asistencial de los cuadros permanentes de la administración pública, tales como celaduría, jardinería, aseo general y limpieza, no tienen que ver con la construcción y sostenimiento de obras públicas, pues se trata de ocupaciones de simple colaboración y apoyo a la gestión institucional, y no de fabricación, transformación, intervención, reparación o mantenimiento de infraestructuras o edificaciones (CSJ SL 33556, 24 jun. 2008; CSJ SL, 26 de Oct. 2010, rad. 38114; CSJ SL 42499, 29 ene. 2014, CSJ SL7340-2014, entre otras).”

En segundo lugar, en el escrito obrante a folio 37 del doc. 02 anexo 06, la señora Nelida Murillo, presenta renuncia en su “calidad de empleada en el cargo de aseadora del colegio Rafael J. Mejía del municipio de Támesis” y asimismo el Decreto 295 de 2003, por medio del cual acepta la renuncia a la señora Murillo,

indica que el régimen aplicable para decidir el retiro del servicio corresponde al artículo 37 de Ley 443 de 1998, *“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.”* propias de los empleados públicos.

De lo antedicho, se deduce que la causante tenía la condición de empleada pública del orden departamental.

Finalmente, no es posible acoger el argumento en que se sustenta la apelación, consistente en que la Resolución 2162 de 2003 establece que el disfrute de la prestación procede al día siguiente del “retiro del servicio oficial”, de donde, según la recurrente, es posible deducir que la señora Murillo Muñoz era trabajadora oficial, pues el mismo no tiene fuerza persuasiva siendo evidente que la expresión servicio oficial es sinónimo de servicio público, el cual puede ser ejercido tanto por empleados públicos como trabajadores oficiales, sumado a lo anterior, tampoco se observa acertado el planteamiento realizado en los alegatos ante esta instancia respecto a que por regla general los trabajadores del Estado son trabajadores oficiales, pues, por el contrario la regla normativa es la inversa, conforme al artículo 5 Decreto 3135 de 1968 y al artículo 233 del Decreto 1222 de 1986, antes citado.

En este contexto debe confirmarse la decisión de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

6.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

RESUELVE


PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el día 27 de marzo de 2023, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARTHA ALICIA FERNANDEZ MURILLO en contra de PENSIONES DE ANTIOQUIA.


SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.


TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen, a fin de que proceda a remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Medellín.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
(Sin firma por ausencia justificada)

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N
075 del 05 de mayo de 2023

consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>